Unidad 3

- Derecho de extranjería.

"La condición jurídica de los individuos se refiere al conjunto de derechos y obligaciones que estos tienen frente al estado de derecho en función a su condición personal, es decir en función de los atributos que como personas les reconoce el derecho y para nuestro caso el derecho mexicano."

CONCEPTOS GENERALES

Definición.

Es el conjunto de derechos y obligaciones de que gozan las personas físicas o jurídicas al encontrarse dentro del ámbito de competencia legislativo y judicial en un sistema jurídico del cual gozan del atributo de ser consideradas como nacionales. A ésta área, también se le conoce como derecho de extranjería o jurisdicción sobre extranjeros.

Concepto de Extranjero y Migración.

La condición jurídica de los individuos se refiere al conjunto de derechos y obligaciones que estos tienen frente al estado de derecho en función a su condición personal, es decir en función de los atributos que como personas les reconoce el derecho y para nuestro caso el derecho mexicano.

La persona se puede encontrar en principio en dos condiciones frente a la ley, primero como individuo sin capacidad de ejercicio de sus derechos, tal como los menores y los sujetos a estado de interdicción y la segunda condición es la de los mayores de edad, lo cual se obtiene cuando la persona cumple 18 años de edad y obtiene por tanto la plenitud en el ejercicio de sus derechos, tratándose de nacionales obtienen además la ciudadanía. En esta primera afirmación encontramos el primer elemento de la condición jurídica de los extranjeros ya que aun cuando obtengan y se les reconozca la mayoría de edad no se les reconoce la ciudadanía por su condición de nacionalidad no mexicana. (73-XVI) Lo anterior en el entendido de que es extranjero aquel que no goza de la ciudadanía mexicana. Sin embargo, todo individuo dentro del territorio nacional, goza de la totalidad de las garantías individuales que nuestro sistema jurídico consagra en los primeros 28 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En nuestro carácter de autoridad migratoria la nacionalidad es el atributo de la persona que mas nos interesa. Sin embargo, basta decir que tanto a mexicanos como a extranjeros el Estado Mexicano les reconoce la misma condición jurídica; y por tanto se les deben ser tratados de igual manera.

En el ámbito civil o familiar ambos tienen los mismos derechos y obligaciones y su tratamiento lo debe realizar la autoridad competente en la materia; lo mismo podríamos decir respecto de la esfera fiscal, laboral o en materias tales como la inversión extranjera. No obstante lo anterior es nuestra obligación como autoridad migratoria, observar la condición jurídica de los extranjeros de manera integral, porque vivimos en un sistema de derecho y como tal, la condición en un ámbito impacta a los demás.

La nacionalidad esta determinada por el reconocimiento que hace un Estado respecto de un individuo y lo considera como integrante de su población, con la plenitud de derechos y obligaciones. Como ustedes saben la nacionalidad se obtiene de manera natural con el nacimiento sea que este se produzca en territorio nacional o que los progenitores sean mexicanos. La otra forma de obtener la nacionalidad es por naturalización.

El artículo 33 de la Constitución especifica que los extranjeros tienen derecho a las garantías que otorga la propia Constitución y delimita las mismas a que estos no puedan inmiscuirse en los asuntos políticos del país. En concordancia en el artículo 1 de la Constitución podemos observar que las garantías individuales sólo podrán restringirse o suspenderse en los casos y con las condiciones que esta establece. La facultad para tales restricciones corresponden al Poder Federal a través de las leyes, según lo establece el artículo 73 en su fracción XVI, que le faculta para "dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, etc."

Existen por tanto limitantes a los extranjeros, por su condición como tales, en las diversas leyes, en:

- Materia política (Art. 33),
- En materia de asociación y petición (Art. 9 y 8 asuntos políticos),
- Libre tránsito (Art. 11 límites por autoridad administrativa en leyes sobre migración),
- Audiencia (Art. 33 extranjero pernicioso, expulsado sin juicio previo),
- Política (ciudadanía y derecho a votar y ser votado),
- Militar y de seguridad (Art. 32 ser mexicano por nacimiento para formar parte del ejército o en fuerzas de policía o seguridad pública, capitanes, pilotos y maquinistas de embarcaciones),
- Propiedad (Art. 27 autorización indispensable salvo faja de 100 Km. En frontera y 50 Km. En playas).

La condición jurídica de los extranjeros en México es el vínculo mediante el cual el Estado Mexicano regula su internación estancia y salida de territorio nacional, misma que como facultad, se encuentra prevista en el artículo 73, fracción XVI: "el Congreso tiene facultad: para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros..."

Se puede decir que dicha condición jurídica se constituye por el sistema de calidades y características migratorias previstas en el Capítulo III, titulado Inmigración, de nuestra vigente Ley General de Población.

DERECHOS Y OBLIGACIONES

Tratados internacionales.

1. La convención sobre condiciones de los extranjeros, firmada en la Habana en 1928 suscrita por México y por 19 países que asistieron a la Sexta Conferencia Panamericana, señala en sus disposiciones más importantes:

Art. 1 El derecho de los estados para establecer por medio de leyes, las condiciones de entrada y residencia de los extranjeros.

Art. 2 Subordina a los extranjeros a la jurisdicción y leyes locales.

Art. 3 Excluye a los extranjeros de la obligación de prestar el servicio militar.

Art. 4 Obliga a los extranjeros a pagar las contribuciones ordinarias y extraordinarias, siempre que sean generales para la población.

Art. 5 Obliga a los Estados a que reconozcan a los extranjeros el goce de las garantías individuales.

México sigue un sistema diferente en relación al goce de las garantías individuales. La Cámara de Senadores aprobó este art. Con una reserva que indica que nuestro país sujeta el otorgamiento de garantías a las limitaciones que señala la ley.

Art. 6 Faculta a los Estados para que por motivos de orden o seguridad puedan expulsar al extranjero.

La cámara de senadores hizo una reserva en el sentido de que la expulsión en México tendrá la extensión y forma establecida por la Constitución.

Art. 7 Prohíbe a los extranjeros inmiscuirse en las actividades políticas privativas de los ciudadanos del país.

2. Nuestro país también es parte de la convención sobre derechos y deberes de los estados, suscrita en Montevideo, Uruguay, el 26 de Diciembre de 1933.

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

El art. 1 constitucional establece que todo individuo, sin hacer distinción a nacionales o extranjeros, tiene derecho a las garantías que otorga la constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

El art. 33 constitucional, sin ser necesario, nuevamente indica que los extranjeros tienen derecho a las garantías que otorga el capítulo I, título primero, de la constitución.

De las disposiciones anteriores se desprende que los extranjeros gozan de derechos en México, sin condicionarlos a la reciprocidad, por lo que se sigue el principio de equiparación a nacionales y asimismo, la restricción a sus garantías individuales sólo pueden estar contenidas en la Ley fundamental, y que a saber son:

1. Restricción al goce de derechos políticos.

Contenida en el art. 33 constitucional, párrafo segundo, que dice:

Los extranjeros no podrán, de ninguna manera, inmiscuirse en los asuntos políticos del país.

De acuerdo con la tendencia generalizada, los excluye del goce de los derechos políticos y los obliga a la abstención, sin embargo, en caso de desacato a ésta disposición, no señala ninguna sanción.

2. Restricción a la garantía de audiencia

Contenida en el art. 33 constitucional, que señala:

...El ejecutivo de la unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente...

La disposición restringe al extranjero la garantía individual consagrada por el art. 14 constitucional, que señala:

...Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho...

3. Restricción al derecho de petición

Contenido en el art. 8 constitucional, que perceptúa:

Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la república.

De lo anterior se desprende que los extranjeros no gozan de derecho de petición en materia política.

4. Restricción al derecho de asociación

Contenida en el art. 9 constitucional, que dice:

No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero sólo los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país...

A contrario sensu el no ciudadano, entre ellos los extranjeros, no pueden asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país.

5. Restricción a los derechos de ingreso, salida tránsito.

Contenida en el art. 11 constitucional, que establece:

Todo hombre tiene derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio, y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte,

salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la república, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

De lo anterior se desprende que para limitar esta garantía a los extranjeros, se deben cumplir alguno de los requisitos siguientes:

- Que lo decrete la autoridad judicial en casos civiles o penales; o
- Que exista disposición legislativa de carácter migratoria, de salud o sobre extranjeros perniciosos, que restrinjan el ejercicio de este derecho.

6. Restricción en materia militar

Contenida en el artículo 32 de la constitución, que en lo conducente indica:

...en tiempo de paz ningún extranjero podrá servir en el ejercicio, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública... para pertenecer a la Marina nacional de Guerra o a la Fuerza Aérea y desempeñar cualquier cargo o comisión en ellas...

7. Restricción en materia marítima y aérea

Contenida igualmente, en el art. 32 constitucional, que dice:

...Se requerirá ser mexicano por nacimiento. Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patronos, maquinistas, mecánicos y, de una manera general, para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana, será también necesaria la calidad de mexicano por nacimiento para desempeñar los cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practica y comandante de aeródromo...

Esta disposición restringe al extranjero de la garantía individual consagrada por el art. 5º constitucional que señala que "A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos..."

8. Restricciones en materia aduanal

Contenida en el art. 32 constitucional, que señala:

...Será también necesaria la calidad de mexicano por nacimiento para desempeñar...Todas las funciones de agente aduanal en la República.

Este precepto restringe la garantía individual consagrada en el art. 5º constitucional, que ha quedado citado.

9. Restricciones en servicio, cargos públicos y concesiones

Está contenida en el art. 32 constitucional, que indica:
Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros, en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones del gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano...

Esta disposición otorga un derecho de preferencia a favor de los mexicanos en trabajos del gobierno, ya sea federal, local o municipal.

10. Restricción al derecho de propiedad

Contenida en el art. 27, frac. I de la constitución, que establece:

Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de tierras, aguas y sus accesiones, o para obtener concesiones de explotación de minas y aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre las tierras y aguas...

El convenio que el extranjero realiza ante la Secretaría de Relaciones Exteriores se le conoce como "cláusula Calvo". Sin embargo muchos países no lo consideran válido, ya que señalan que aunque el particular haya renunciado a su protección, el Estado no puede aceptarlo, debido a que en todo tiempo tiene la obligación de proteger a sus nacionales.

Asimismo, se critica que se hable de dominio directo, ya que de una manera más amplia debería referirse a la adquisición de cualquier derecho que implique un poder jurídico sobre las tierras y aguas ubicadas en las zonas fronterizas o en los litorales.

Leyes Federales

Existen muchas leyes federales que se refieren a los extranjeros, algunas de las cuales veremos posteriormente:

- La ley general de población y su reglamento;
- La Ley orgánica de la fracción I del art. 27 de la Constitución;
- La Ley de inversión extranjera;
- El código civil para el Distrito Federal;
- El código de Comercio;
- La ley de títulos y operaciones de crédito;

- La ley federal del trabajo;
- La ley del impuesto sobre la renta;
- La ley federal de derechos de autor;
- La ley federal de educación;
- La ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México;
- La ley federal de turismo;
- La ley federal de aguas;
- La ley del petróleo;
- La ley de invenciones y marcas;
- La ley de la industria eléctrica;
- La ley de vías generales de comunicación;
- La ley general de salud;
- La ley del notariado para el Distrito Federal;
- Etcétera.

**condición jurídica del extranjero en el derecho mexicano vigente
calidades migratorias:**

La migración como movilidad de personas tiene diversas modalidades de acuerdo con el sentido o propósito de tal movilidad, por lo que se puede afirmar que son tres los momentos migratorios: la internación, la estancia y la salida del territorio nacional y en todos los casos debemos referenciar al Estado Mexicano y a los migrantes como elementos que intervienen en el fenómeno migratorio.

Migración es el tránsito de personas del territorio del nacional al de cualquier otro Estado o del extranjero al territorio nacional; con el propósito de llevar a cabo actividades lícitas de manera provisional o, de establecerse, por una temporalidad o de manera permanente, en el lugar de destino.

Inmigración es el tránsito de personas del extranjero al territorio nacional; con el propósito de llevar a cabo actividades lícitas de manera provisional o, de establecerse, por una temporalidad o de manera permanente, en el territorio nacional.

Emigración es el tránsito de personas del territorio del nacional al de cualquier otro Estado con el propósito de establecerse, por una temporalidad o de manera permanente, en el lugar de destino.

La internación es un acto de inmigración y en el caso de los extranjeros, su llegada a territorio nacional, impacta en la seguridad de los Estados, en su población y en el ejercicio de la soberanía por el gobierno mexicano. Por lo cual la migración es un aspecto permanente en el quehacer de los gobiernos. El permiso correspondiente se trata de un acto de soberanía y en consecuencia debe moderarse de acuerdo con los impactos previsibles que genera.

Existen mecanismos de autorización automática tales como los convenios de supresión de visa que se firman entre los Estados o la emisión de disposiciones administrativas que facilitan el ingreso sin requerir el previo permiso para la internación, pudiendo condicionarse a la acreditación de ciertos requisitos ante las representaciones de México en el extranjero (GI, GII, GIII) pero en principio el

mecanismo de internación implica que la autoridad encargada de la política interna de los Estados otorgue permiso para que el extranjero pueda entrar a territorio nacional y esto se reglamenta tomando en consideración la nacionalidad y las actividades que el extranjero pretende realizar una vez que se encuentre en territorio nacional.

La estancia de los extranjeros en territorio nacional implica su regulación a través de otorgar autorización específica para llevar a cabo actividades, salvo aquellos casos en que la autorización de internación sea en alguna de las características que tienen limitación en las actividades a realizar (turista, transmigrante).

La regulación de la estancia de los extranjeros obedece a consideraciones de orden. De esto que se exija de los extranjeros el registrar y dar aviso de sus cambios de domicilio, la autorización de cambio o ampliación de actividades, el otorgamiento de autorización para realizar ciertos actos jurídicos como el matrimonio o divorcio, etc.

El actual sistema de calidades migratorias pretende contemplar las diferentes intenciones de los extranjeros para radicarse o no en territorio nacional.

Como ya se mencionó actualmente son tres las calidades migratorias: No Inmigrante, Inmigrante e Inmigrado.

Es conveniente definir lo que es la calidad y la característica migratoria.

Calidad Migratoria: Es la condición jurídica a que están sujetos los extranjeros al internarse, permanecer y salir del país.

Característica Migratoria: Es la variante en la condición jurídica que autoriza a

un extranjero, permitiéndole el desarrollo de actividades específicas en territorio nacional.

La primer calidad migratoria que contempla la Ley vigente es la de **No Inmigrante** y a través de ella se pretende regular a aquellos extranjeros que no tienen el propósito de establecerse en territorio nacional de manera permanente.

Se supone que en ella se amparan aquellos que no quieren inmigrar, sino permanecer por alguna temporalidad en nuestro país para el cumplimiento de algún objetivo específico, como son las actividades de recreo, tránsito hacia otro país, visita a puntos fronterizos o puertos de entrada, ejercer alguna actividad lucrativa a resultas de un contrato o actividad no lucrativa como el caso de los dependientes económicos, estar bajo la protección del estado mexicano cuando se sufren persecuciones o por las condiciones de inseguridad en su país de origen, llevar a cabo estudios, entre otras circunstancias de las cuales se desprenden las características que contemplan la ley y su reglamento para esta calidad que son:

Por último la calidad de **Inmigrado** es aquella que se otorga para aquellos extranjeros que teniendo una estancia de 5 años como Inmigrante pretenden obtener su residencia definitiva en territorio nacional. Aún cuando si hiciéramos un ejercicio de seguimiento lógico a las calidades migratorias la calidad de inmigrado debería otorgarse en automático, el legislador no consideró esta posibilidad y condicionó al cumplimiento de ciertos requisitos el otorgamiento de esta calidad.

No solamente se requiere la solicitud, sino que esta se haga dentro de una temporalidad específica, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento de la temporalidad de los cinco años como Inmigrante y que no haya permanecido fuera del país por más de 18 meses.

Por último quisiera manifestarles lo siguiente, la dinámica migratoria debe entenderse como un proceso de asimilación de los extranjeros al Estado Mexicano. El contacto primario de un extranjero es como visitante, en un sentido literal del término y no en su concepción legal migratoria, esto no implica intención del extranjero para radicarse en territorio nacional sino exclusivamente para llevar a cabo alguna actividad provisional y secundaria a su condición de vida tales como el caso de los turistas, transmigrantes, visitantes locales o provisionales e incluso el caso de los estudiantes pues el propósito esencial es de llevar a cabo estudios y no radicarse en México.

En otro orden cuando la pretensión del extranjero es radicarse en territorio nacional, sea de manera temporal o definitiva debemos encuadrar su condición jurídica como residente temporal aún cuando su pretensión se la de permanecer definitivamente a efecto de que el extranjero tenga un periodo de prueba en el cual acredite que será respetuoso del estado de derecho y sus actividades redunden en beneficio de la sociedad mexicana.

En conclusión la condición de residente definitivo permite que el extranjero pueda desarrollar plenamente sus actividades sin más limitación que las que le impone su condición de extranjero.

Para finalizar y de manera simultánea se concede al extranjero la posibilidad legal de acceder a la nacionalidad mexicana que permite su absoluta integración al Estado Mexicano y en consecuencia la plenitud en el ejercicio de derechos y obligaciones quedando solamente las limitaciones que la ley previene para los mexicanos por naturalización relativos a la imposibilidad de acceder a ciertos cargos de elección popular o administrativos y no poder llevar a cabo ciertos actos que son causa de pérdida de la nacionalidad.

MODALIDADES EN LA MIGRACIÓN DE EXTRANJEROS A MÉXICO

Al hablar de las limitaciones a las garantías individuales impuestas a los extranjeros, señalamos que éstos al igual que los nacionales tienen, de conformidad con el art. 11 constitucional, restricciones para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, ya que dichas libertades están subordinadas a las modalidades que impongan las leyes sobre emigración, inmigración, salubridad general de la República, y específicamente para los primeros, las que dictan las leyes para extranjeros perniciosos residentes en el país.

El precepto constitucional habla de inmigración y emigración, pudiendo referirse en términos generales al movimiento migratorio que engloba los dos conceptos, tanto a la inmigración, que implica el internarse al territorio, como a la emigración que se restringe a su salida. En este apartado veremos las modalidades impuestas a los extranjeros para realizar esta actividad.

Modalidades en la inmigración

De conformidad con nuestra legislación podemos señalar que a la fecha la inmigración de los extranjeros al país está subordinada al cumplimiento de cuatro clases de requisitos: sanitarios, diplomáticos, fiscales y administrativos.

Requisitos Sanitarios.

De acuerdo a la ley general de salud en sus arts. 360 y 361, indican que la autoridad sanitaria someterá a exámen médico a cualquier persona que pretenda entrar al territorio nacional, ya que no puedan internarse en la República, hasta que cumplan el requisito sanitario, los que padezcan peste, cólera, fiebre amarilla o cualquier otra enfermedad transmisible que fije la secretaría de salud.

Requisitos Diplomáticos.

Cabe señalar que el satisfacer este requisito no implica alguna autorización, ni obliga a las autoridades migratorias dependientes de la Secretaría de Gobernación, a permitir la internación del extranjero en el país, sino que sólo certifica que su documentación reúne los requisitos necesarios para que, en caso de ser procedente, se le autorice su internación y estancia en la república.

Esta certificación la realiza la Secretaría de Relaciones Exteriores por conducto de las autoridades diplomáticas o consulares mexicanas, mediante el visado del pasaporte extranjero. Nuestro país tiene celebrados convenios con varios Estados en los que se exime a sus nacionales del requisito de la visa o establece su otorgamiento gratuito.

Requisitos Fiscales.

Contenidos en la ley federal de derechos, al establecer las contribuciones que deben erogar los extranjeros para obtener su documentación en la que conste la autorización de la secretaría de Gobernación para ingresar al país en alguna calidad y característica migratoria u obtener el visado del pasaporte, en su caso.

El art. 32 de la abrogada ley de nacionalidad y naturalización, establecía que los extranjeros estaba, obligados a contribuir a los gastos públicos, siempre que alcanzaran a la generalidad de la población, por lo que se criticaba su existencia y legalidad.

Requisitos Administrativos.

Son aquellos que el extranjero debe desahogar ante la Secretaría de Gobernación para que ingresen al país en alguna calidad y característica migratoria, de conformidad con los lineamientos establecidos en la ley general de población.

La ley general de población fue publicada en el diario oficial del 7 de Enero de 1974 y su reglamento el 31 de Agosto de 1992. En ésta ley se crea el Consejo Nacional de Población, quién tiene a su cargo la planeación demográfica del país.

La inmigración es el aspecto de la política demográfica que nos interesa en este momento, por lo que nos limitaremos a estudiar este fenómeno del movimiento migratorio.

Al respecto, el art. 32 de la Ley establece el conocido como “sistema de cuotas” que trae como consecuencia un trato desigual entre los extranjeros.

Asimismo, el art. 37 de la citada ley, establece que la secretaría de gobernación podrá negar a los extranjeros su entrada al país o el cambio de su calidad o característica migratoria, por cualesquiera de los siguientes motivos:

1. Que no existe reciprocidad internacional;
2. Que lo exija el equilibrio demográfico del país;
3. Que no le permitan las cuotas a que se refiere el citado art. 32 de la ley;
4. Que se estime lesivo para los intereses económicos de los nacionales;
5. Que hayan observado mala conducta durante su estancia en el país o tenga malos antecedentes en el extranjero;
6. Que no se encuentren física o mentalmente sanos a juicio de la autoridad sanitaria; y
7. Que así lo prevean otras disposiciones legales.

La residencia del extranjero en el país puede realizarse bajo tres calidades migratorias, aunque sólo se puede ingresar con alguna de las dos primeras. De conformidad con los arts. 41 y 52 de la Ley son las siguientes: no inmigrante, inmigrante e inmigrado.

No inmigrante

Regulada por el art. 42 de la ley y los arts. 82 a 94 de su reglamento. Es el extranjero que con permiso de la secretaría de Gobernación se interna en el país temporalmente, dentro de alguna de las siguientes características:

I.-Turista. Con fines de recreo o salud, para actividades artísticas, culturales o deportivas, no remuneradas ni lucrativas, con temporalidad máxima de seis meses improrrogables.

II.-Transmigrante. En tránsito hacia otro país y que podrá permanecer en territorio nacional hasta por treinta días.

III.- Visitante. Para dedicarse al ejercicio de alguna actividad lucrativa o no, siempre que sea lícita y honesta, con autorización para permanecer en el país hasta por un año.

Cuando el extranjero visitante: durante su estancia viva de sus recursos traídos del extranjero, de las rentas que éstos produzcan o de cualquier ingreso proveniente del exterior; su internación tenga como propósito conocer alternativas de inversión o para realizar éstas; se dedique a actividades científicas, técnicas, de asesoría, artísticas, deportivas o similares; se interne para ocupar cargos de confianza, o asistir a asambleas y sesiones de consejos de administración de empresas; podrán concederse hasta cuatro prórrogas por igual temporalidad cada una, con entradas y salidas múltiples.

IV.- Ministro de culto o asociado religioso. Para ejercer el ministerio de cualquier culto, o para la realización de labores de asistencia social y filantrópicas, que coincidan con los fines de la asociación religiosa a la que pertenezca, siempre que ésta cuente con registro previo ante la Secretaría de Gobernación y que el extranjero posea, con antelación, el carácter de ministro de culto o de asociado en los términos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. El permiso se

otorgará hasta por un año y podrán concederse hasta cuatro prórrogas por igual temporalidad cada una, con entradas y salidas múltiples.

V.-Asilado político. Para proteger su libertad o su vida de persecuciones políticas en su país de origen, autorizado por el tiempo que la Secretaría de Gobernación juzgue conveniente, atendiendo a las circunstancias que en cada caso concurren. Si el asilado político viola las leyes nacionales, sin perjuicio de las sanciones que por ello le sean aplicables, perderá su característica migratoria, y la misma Secretaría le podrá otorgar la calidad que juzgue conveniente para continuar su legal estancia en el país. Asimismo, si el asilado político se ausenta del país, perderá todo derecho a regresar en esta calidad migratoria, salvo que haya salido con permiso de la propia Dependencia.

VI.- Refugiado. Para proteger su vida, seguridad o libertad, cuando hayan sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en su país de origen, que lo hayan obligado a huir a otro país. No quedan comprendidos en la presente característica migratoria aquellas personas que son objeto de persecución política prevista en la fracción anterior. La Secretaría de Gobernación renovará su permiso de estancia en el país, cuantas veces lo estime necesario. Si el refugiado viola las leyes nacionales, sin perjuicio de las sanciones que por ello le sean aplicables, perderá su característica migratoria y la misma Secretaría le podrá otorgar la calidad que juzgue procedente para continuar su legal estancia en el país. Asimismo, si el refugiado se ausenta del país, perderá todo derecho a regresar en esta calidad migratoria, salvo que haya salido con permiso de la propia Secretaría. El refugiado no podrá ser devuelto a su país de origen, ni enviado a cualquier otro, en donde su vida, libertad o seguridad se vean amenazadas.

La Secretaría de Gobernación podrá dispensar la sanción a que se hubiere hecho acreedor por su internación ilegal al país, al extranjero a quien se otorgue esta característica migratoria, atendiendo al sentido humanitario y de protección que orienta la institución del refugiado.

VII.- Estudiante. Para iniciar, terminar o perfeccionar estudios en instituciones o planteles educativos oficiales, o incorporados con reconocimiento oficial de validez, o para realizar estudios que no lo requieran, con prórrogas anuales y con autorización para permanecer en el país sólo el tiempo que duren sus estudios y el que sea necesario para obtener la documentación final escolar respectiva, pudiendo ausentarse del país, cada año, hasta por 120 días en total; si estudia en alguna ciudad fronteriza y es residente de localidad limítrofe, no se aplicará la limitación de ausencias señalada.

VIII.-Visitante distinguido. En casos especiales, de manera excepcional, podrá otorgarse permisos de cortesía para internarse y residir en el país, hasta por seis meses, a investigadores, científicos o humanistas de prestigio internacional, periodistas o a otras personas prominentes. La Secretaría de Gobernación podrá renovar estos permisos cuando lo estime pertinente.

IX.-Visitantes locales. Las autoridades de Migración podrán autorizar a los extranjeros a que visiten puertos marítimos o ciudades fronterizas sin que su permanencia exceda de tres días.

X.-Visitante provisional. La Secretaría de Gobernación podrá autorizar como excepción hasta por 90 días, el desembarco provisional de extranjeros que lleguen a puertos de mar o aeropuertos con servicio internacional, cuya documentación carezca de algún requisito secundario. En estos casos deberán constituir depósito o fianza que garantice su regreso al país de procedencia, de su nacionalidad o de su origen, si no cumplen el requisito en el plazo concedido.

XI.- Corresponsal. Para realizar actividades propias de la profesión de periodista, para cubrir un evento especial o para su ejercicio temporal, siempre que acredite debidamente su nombramiento o ejercicio de la profesión en los términos que determine la Secretaría de Gobernación. El permiso se otorgará hasta por un año, y podrán concederse prórrogas por igual temporalidad cada una, con entradas y salidas múltiples.

Todo extranjero que se interne al país como No Inmigrante, podrá solicitar el ingreso de su cónyuge y familiares en primer grado, a los cuales podrá concedérseles, cuando no sean titulares de una característica migratoria propia, la misma característica migratoria y temporalidad que al No Inmigrante, bajo la modalidad de dependiente económico.

La calidad de Inmigrante permite la realización de actividades iguales a las que se permiten como No Inmigrante y sus características son las de: Rentista, Inversionista, Profesional, Cargo de Confianza, Científico, Técnico, Familiares, Artistas y Deportistas y por último Asimilados.

De la simple enumeración de las características observamos que corresponden a las del No Inmigrante, pero llama la atención la última de las mencionadas que fue por cierto, la última que el legislador integró a la Ley. La característica del Asimilado surge de la necesidad de otorgar la calidad de Inmigrante a aquellos extranjeros que pretendían establecerse de manera definitiva en México, pero que su condición no les permitía acceder a alguna de las características que la ley preveía para esta calidad, comprobándose con ello el comentario que se hiciera de que la ley vigente se encuentra rebasada.

Inmigrante

Los reglamentan los arts. 44 a 50 de la ley y 95 a 108 del reglamento.

Es el extranjero que se interna legalmente en el país con el propósito de radicar en él, entanto adquiere la calidad de inmigrado. Se acepta hasta por cinco años y tienen obligación de comprobar anualmente, a satisfacción de la secretaría de Gobernación, que está cumpliendo con las obligaciones que le fueron señaladas para su internación y las que establecen las disposiciones migratorias aplicables.

No puede estar ausente del país por más de dos años, en el lapso de cinco años para los que se autoriza su estancia, salvo que lo determine la secretaría de Gobernación. En su oportunidad, no pueden solicitar su cambio de calidad a

inmigrado, si permanecieron fuera de la República por más de dieciocho meses en forma continua o con intermitencias. Esta calidad migratoria tiene las siguientes características:

- I. Rentista. Son las personas que han decidido venir a nuestro país para vivir de sus recursos traídos del extranjero; los intereses que produzca la inversión de su capital en certificados, títulos y bonos del Estado, o de las instituciones de crédito nacionales u otras que determine la secretaría de Gobernación; y cualquier ingreso permanente que proceda del exterior.
- II. Inversionista. Es el extranjero que ingresa en el territorio nacional para invertir su capital en la industria, comercio y servicios, de conformidad con las leyes nacionales, siempre que contribuya al desarrollo económico y social del país
- III. Profesional. Es el extranjero que ingresa al territorio nacional para ejercer una profesión.
- IV. Cargo de confianza. Extranjero que ingresa para asumir cargos de dirección, administrador único u otros de absoluta confianza en empresas o instituciones establecidas en la República.
- V. Científico. Extranjero que se interna para dirigir o realizar investigaciones científicas, para difundir sus conocimientos científicos, preparar investigadores o realizar trabajos docentes con interés de desarrollo nacional.
- VI. Técnico. Extranjero que ingresa para realizar investigaciones aplicadas dentro de la producción o desempeñar funciones técnicas o especializadas que no puedan ser prestadas por residente en el país, a juicio de la Secretaría de Gobernación.
- VII. Familiar. Extranjeros que se internan en el país para vivir bajo la dependencia económica del cónyuge o un pariente consanguíneo inmigrante, inmigrado o mexicano en línea recta sin límite de grado o transversal hasta el segundo.
- VIII. Artista y deportista. Extranjeros que se internan para realizar actividades artísticas, deportivas o análogas; siempre que a juicio de la Secretaría de Gobernación dichas actividades resulten benéficas para el país.

Inmigrado

Es el extranjero que adquiere derechos de residencia definitiva en el país, siempre y cuando:

a) Haya residido legalmente en el territorio nacional durante cinco años en la calidad de inmigrante.

No se interrumpe la residencia si durante ese lapso no se ausentó del país más de dieciocho meses;

b) Haya observado las disposiciones de la ley, y que sus actividades y condición migratoria hayan sido las mismas para las cuales estuvo autorizado; y

c) Lo solicite a la secretaría de Gobernación, aunque el interesado se encuentre fuera del país, dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de su cuarto refrendo y mediante declaratoria expresa de la misma.

Una vez obtenida esta calidad migratoria, el interesado puede dedicarse a la actividad que desee, siempre y cuando no haya limitación expresa de la secretaría de Gobernación, y puede entrar y salir del país libremente, pero si permanece en el extranjero dos años consecutivos perderá su calidad; así, como si en un lapso de diez años estuviere ausente más de cinco.

MODALIDADES EN LA EMIGRACIÓN

Existen tres maneras para obligar al extranjero a abandonar el territorio nacional: deportación, expulsión y extradición.

I. Deportación. Consiste en obligar a un extranjero a salir del país cuando no reúne o deja de reunir los requisitos sanitarios y migratorios necesarios para su internación y estancia. La Ley General de Población establece varias hipótesis.

1. Carencia de documentación migratoria. Contienda señalada en el artículo 27, señala:

Los extranjeros cuya internación sea rechazada por el servicio de migración, por no poseer documentación migratoria o por no estar ésta en regla, así como los polizones, deberán salir del país por cuenta de la empresa de transportes que propició su internación sin perjuicio de las sanciones que les correspondan.

2. Vencimiento de documentación migratoria y pasajeros en tránsito. Contienda señalada en el artículo 53, que indica:

.....Al inmigrante que vencida su temporalidad de 5 años no solicite en los plazos que señala el Reglamento su calidad de inmigrado o no se le conceda ésta, se le cancelará su documentación migratoria, debiendo salir del país en el plazo que le señale para el efecto la Secretaría de Gobernación. En estos casos el extranjero podrá solicitar nueva calidad migratoria de acuerdo con la Ley. Y en el artículo 26, que señala:

Los extranjeros que encontrándose en tránsito desembarquen con autorización del Servicio de Migración en algún puerto nacional y permanezca en tierra sin autorización legal por causas ajenas a su voluntad después de la salida del buque o aeronave en que hacen la travesía, deberán presentarse inmediatamente a la oficina de Migración correspondiente. En este caso dicha oficina tomará las medidas conducentes para su inmediata salida.

3. Cancelación de documentación migratoria. Contienda en el artículo 125 de la Ley, que dice:

Al extranjero que incurra en las hipótesis previstas en los artículos 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127 y 138 de esta Ley, se le cancelará la calidad migratoria y será expulsado (debería decir deportado) del país, sin perjuicio de que se le apliquen las penas establecidas en dichos preceptos.

4. Procedencia del juicio. Contra las resoluciones administrativas mediante las que se deporta a un extranjero cabe el juicio de amparo, de conformidad con la siguiente ejecutoria:

Extranjeros indocumentados. procedencia del juicio de amparo promovido por. Caso no previsto por el artículo 33 Constitucional.

No es exacto que el quejoso carezca de capacidad jurídica para promover el juicio de amparo, en caso diverso al ejercicio de facultades que concede el artículo 33 Constitucional al Ejecutivo de la Unión, pues aun en el supuesto de que se trate de un extranjero sin autorización para permanecer en el territorio mexicano, el hecho de entrar en ese territorio nacional implica la protección de las leyes mexicanas en los términos de los artículos 1, y 2 de la Constitución Federal Informe 1984, tercera parte, p. 33, Primer Circuito, Primero Administrativo, AR 721/82, Christopher Lee Wade Roberts, 4 de julio de 1984, unanimidad resolutivos y mayoría de consideraciones.

II. Expulsión. Contenida en el artículo 33 Constitucional, es una prerrogativa exclusiva del Ejecutivo de la Unión que tiene la facultad de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente.

Restringe a los extranjeros la garantía de audiencia contemplada en el artículo 14 de la Ley fundamental, no obstante debe ser respetada la garantía de legalidad, ya que la resolución tiene que estar debidamente fundamentada. Cabe transcribir las siguientes ejecutorias dictadas por la SCJN:

Extranjeros, expulsión de. Aún cuando el artículo 33 de la Constitución otorgue al Ejecutivo facultad para hacer abandonar el territorio nacional significa que los extranjeros deban ser privados del derecho que tienen para disfrutar de las garantías que otorga el Capítulo I, Título Primero, de la Constitución; por lo cual la orden de expulsión debe ser fundada, motivada y despachada de acuerdo con las normas y los conductos legales. Velasco Tovar Luis y coags., t. CX, p. 112, 3 de octubre de 1951, 5 votos.

Extranjeros perniciosos, suspensión improcedente. Conforme al artículo 33 constitucional, el Presidente de la República tiene la facultad exclusiva de hacer abandonar el país, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente; y contra el ejercicio de esta facultad es improcedente conceder la suspensión.

Quinta época, t. IX, p. 49, Soriano Lillie; t. XV, p. 25 Bergeron Mariot; t. XV, p. 89, González Vicente; t. XVI, p. 59, Chon Bing J. Domingo; t. XVI, p. 1587, Chan Manuel y coags. 8apéndice 1917-1975, Segunda sala. Tesis 395, p. 652)

Cabe indicar, como se analizó con anterioridad, que:

a) El artículo 125 de la Ley General de Población, al utilizar erróneamente la connotación jurídica de la expulsión conforme a la Carta Magna y al pretender referirse técnicamente a la deportación indica:

Al extranjero que incurra en las hipótesis previstas en los artículos 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127 y 138 de esta Ley se le cancelará la calidad

migratoria y será expulsado del país, sin perjuicio de que se le apliquen las penas establecidas en dichos preceptos.

b) Al utilizar de manera errónea el término expulsión, ya que técnicamente se trata de una deportación, el artículo 126 de la Ley General de Población señala:

En los casos en que se atente en contra de la soberanía o la seguridad nacional, la expulsión será definitiva. En todos los demás casos la Secretaría de Gobernación señalará el periodo durante el cual el extranjero deberá reingresar al país. Durante dicho periodo sólo podrá ser readmitido por acuerdo expreso del Secretario de Gobernación o del subsecretario respectivo.

III. Extradición. Es una forma de cooperación en materia penal, que permite a las autoridades judiciales de una entidad federativa o de un Estado soberano solicitar de otro la entrega de un individuo que se halla fuera de su territorio y se encuentra en el Estado requerido, para juzgarlo o sancionarlo. No se utiliza sólo para los extranjeros, ya que los nacionales, de manera excepcional, pueden ser obligados a salir del país mediante esta figura. En principio, obsequiar la extradición es un acto unilateral de voluntad del Estado requerido, ya que no hay obligación jurídica, a menos que exista un tratado internacional. En México es regulada por:

a) El artículo 119 de la Constitución, que establece:

.... Cada estado y el Distrito Federal están obligados a entregar sin demora a las indiciados, procesados o sentenciados, así como a practicar el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito, atendiendo la autoridad de cualquier otra entidad federativa que los requiera. Estas diligencias se practicarán, con intervención de las respectivas procuradurías generales de justicia, en los términos de los convenios de colaboración que, al efecto, celebren las entidades federativas. Para los mismos fines, los estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios de colaboración con el gobierno federal, quien actuará a través de la Procuraduría General de la República.

Las extradiciones a requerimiento de Estado extranjero serán tramitadas por el ejecutivo federal, con la intervención de la autoridad judicial en los términos de esta Constitución, los tratados internacionales que al respecto se suscriban y las leyes reglamentarias. En esos casos, el auto del Juez que mande cumplir la requisitoria será bastante para motivar la detención hasta por sesenta días naturales.

b) La Ley de Extradición Internacional, reglamentaria del artículo 119 Constitucional.

PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS EN MÉXICO

México regula la actividad de las sociedades extranjeras cuando realizan actos que tienen relación con nuestro país, ya sea mediante el análisis de su existencia o personalidad al actuar en defensa de sus derechos o exigiéndoles el cumplimiento de sus obligaciones ante las autoridades mexicanas, o reglamentando su capacidad para realizar las actividades señaladas en su objeto social dentro del territorio, ya sea con el propósito de llevarlas a cabo de manera permanente, mediante el establecimiento de sucursales o agencias, o en forma

ocasional, sin el propósito de practicarlos de manera habitual y sistemática. En este apartado me ocupo del aspecto conflictual consistente en el reconocimiento de las personas jurídicas extranjeras de carácter civil y mercantil en el sistema jurídico mexicano.

Hay que recordar que nuestro país es parte de la convención Interamericana sobre personalidad y capacidad de las personas jurídicas en el derecho internacional privado, emanada de la CIDIP III, llevada a cabo en la paz ; Bolivia, el 24 de Mayo de 1987 y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 19 de Agosto del mismo año.

Reconocimiento de personas jurídicas extranjeras de naturaleza civil en México.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 2736 del Código Civil Federal, la existencia, capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, funcionamiento, transformación, disolución, liquidación y fusión de las personas morales extranjeras de naturaleza privada se regirán por el derecho de su constitución, entendiéndose por tal, aquél del estado en que se cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas personas.

En ningún caso el reconocimiento de una persona moral extranjera excederá a la que le otorgue el derecho conforme al cual se constituyó.

Cuando alguna persona extranjera de naturaleza privada actúe por medio de algún representante, se considerará que tal representante, o quien lo substituya, está autorizado para responder a las reclamaciones y demandas que se intenten en contra de dicha persona con motivo de los actos en cuestión.

LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Importancia

Actualmente México se ha alejado de las políticas proteccionista e iniciado su apertura a los capitales extranjeros, considerando que con ello se fomentará el desarrollo del país.

Por lo anterior, se han celebrado tratados internacionales y modificado la legislación nacional. Sin embargo, lo anterior por sí solo no es suficiente y es necesario apoyar la política con otras medidas, ya que un inversionista extranjero para colocar sus recursos en otro Estado toma en cuenta varios aspectos, como el menor costo de mano de obra, la calificación de la misma, exigencias administrativas menos rigurosas, estabilidad política y jurídica, potencialidad del mercado interno, infraestructura aprovechable, estímulos fiscales, etcétera.

Es importante distinguir entre la inversión extranjera directa e indirecta:

- a) Directa. Consistente en el desplazamiento de capital por personas físicas o jurídicas para emprender negocios en un Estado diferente de aquel en donde se generaron los recursos; y
- b) Indirecta. Que se refiere a los empréstitos que obtienen las personas físicas o jurídicas del exterior.

Criticas

Durante mucho tiempo ha existido la discusión de las ventajas de la inversión extranjera. Estos son algunos de los razonamientos a favor:

- Aporta capitales para el desarrollo del país;
- Agiliza y dinamiza la economía nacional;
- Genera impuestos;
- Fomenta fuentes de mano de obra;
- Ayuda a que se especialicen los trabajadores mexicanos; y
- Aporta modernas tecnologías.

Razonamientos en contra:

- Por lo general adquieren un lugar monopolístico debido a su superioridad financiera y técnica;
- Desplaza a empresas locales y dificulta la creación de industrias nuevas en el ramo donde despliegan su actividad;
- Pueden originar descapitalización debido a los pagos realizados por concepto de intereses, uso de marcas, patentes, diseños industriales, etcétera;
- Transfieren al extranjero sus ganancias;
- Están ligadas a intereses políticos del exterior y pueden servir como medio de presión política; y
- Obedecen al ánimo de lucro y no a la satisfacción de las necesidades sociales del país.

LEY DE EXTRADICIÓN

TEXTO VIGENTE

(Última reforma aplicada 18/05/1999) Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1975

CAPITULO I

Objeto y principios

Artículo 1

Las disposiciones de esta ley son de orden público, de carácter federal y tienen por objeto determinar los casos y las condiciones para entregar a los Estados que lo soliciten, cuando no exista tratado internacional, a los acusados ante sus tribunales, o condenados por ellos, por delitos del orden común.

Artículo 2

Los procedimientos establecidos en esta ley se deberán aplicar para el trámite y resolución de cualquier solicitud de extradición que se reciba de un gobierno extranjero.

Artículo 3

Las extradiciones que el Gobierno Mexicano solicite de estados extranjeros, se regirán por los tratados vigentes y a falta de éstos, por los artículos 5, 6, 15 y 16 de esta ley.

Las peticiones de extradición que formulen las autoridades competentes federales, de los Estados de la República o del fuero común del Distrito Federal, se tramitarán ante la Secretaría de Relaciones Exteriores por conducto de la Procuraduría General de la República.

Artículo 4

Cuando en esta ley se haga referencia a la ley penal mexicana, deberá entenderse el Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, así como todas aquellas leyes federales que definan delitos.

Artículo 5

Podrán ser entregados conforme a esta ley los individuos contra quienes en otro país, se haya incoado un proceso penal como presuntos responsables de un delito o que sean reclamados para la ejecución de una sentencia dictada por las autoridades judiciales del Estado solicitante.

Artículo 6

Darán lugar a la extradición los delitos dolosos o culposos, definidos en la ley penal mexicana, si concurren los requisitos siguientes:

I.-Que tratándose de delitos dolosos, sean punibles conforme a la ley penal mexicana y a la del Estado solicitante, con pena de prisión cuyo término medio aritmético por lo menos sea de un año; y tratándose de delitos culposos, considerados como graves por la ley, sean punibles, conforme a ambas leyes, con pena de prisión.

II.-Que no se encuentren comprendidos en alguna de las excepciones previstas por esta ley.

Artículo 7

No se concederá la extradición cuando:

I.-El reclamado haya sido objeto de absolución, indulto o amnistía o cuando hubiere cumplido la condena relativa al delito que motive el pedimento;

II.-Falte querrela de parte legítima, si conforme a la ley penal mexicana el delito exige ese requisito;

III.-Haya prescrito la acción o la pena, conforme a la ley penal mexicana o a la ley aplicable del Estado solicitante, y

IV.-El delito haya sido cometido dentro del ámbito de la jurisdicción de los tribunales de la República.

Artículo 8

En ningún caso se concederá la extradición de personas que puedan ser objeto de persecución política del Estado solicitante, o cuando el reclamado haya tenido la condición de esclavo en el país en donde se cometió el delito.

Artículo 9

No se concederá la extradición si el delito por el cuál se pide es del fuero militar.

Artículo 10

El Estado Mexicano exigirá para el trámite de la petición, que el Estado solicitante..... se comprometa:

I.-Que, llegado el caso, otorgará la reciprocidad;

II.-Que no serán materia del proceso, ni aún como circunstancias agravantes, los delitos cometidos con anterioridad a la extradición, omitidos en la demanda e inconexos con los especificados en ella. El Estado solicitante queda relevado de este compromiso si el inculpado consciente libremente en ser juzgado por ello o si permaneciendo en su territorio más de dos meses continuos en libertad absoluta para abandonarlo, no hace uso de esta facultad;

III.-Que el presunto extraditado será sometido a tribunal competente, establecido por la ley con anterioridad al delito que se le impute en la demanda, para que se le juzgue y sentencie con las formalidades de derecho;

IV.-Que será oído en defensa y se le facilitarán los recursos legales en todo caso, aun cuando ya hubiere sido condenado en rebeldía;

V.-Que si el delito que se impute al reclamado es punible en su legislación hasta con la pena de muerte o alguna de las señaladas en el artículo 22 constitucional, sólo se impondrá la de prisión o cualquier otra de menor gravedad que esa legislación fije para el caso, ya sea directamente o por substitución o conmutación.

VI.-Que no se concederá la extradición del mismo individuo a un tercer Estado, sino en los casos de excepción previstos en la segunda fracción de este artículo; y

VII.-Que proporcionará al Estado mexicano una copia auténtica de la resolución ejecutoriada que se pronuncie en el proceso.

Artículo 11

Cuando el individuo reclamado tuviere causa pendiente o hubiere sido condenado en la República por delito distinto del que motive la petición formal de extradición, su entrega al Estado solicitante, si procediere, se diferirá hasta que haya sido decretada su libertad por resolución definitiva.

Artículo 12

Si la extradición de una misma persona fuere pedida por dos o más Estados y respecto de todos o varios de ellos fuere procedente, se entregará el acusado:

I.-Al que lo reclame en virtud de un tratado;

II.-Cuando varios Estados invoquen tratados, a aquel en cuyo territorio se hubiere cometido el delito;

III.-Cuando concurren dichas circunstancias, al Estado que lo reclame a causa de delito que merezca pena más grave; y

IV.-En cualquier otro caso, al que primero haya solicitado la extradición o la detención provisional con fines de extradición

Artículo 13

El Estado que obtenga la preferencia de la extradición con arreglo al artículo anterior, podrá declinarla en favor de un tercero que no la hubiere logrado.

Artículo 14

Ningún mexicano podrá ser entregado a un Estado extranjero sino en casos excepcionales a juicio del Ejecutivo.

Artículo 15

La calidad de mexicano no será obstáculo a la entrega del reclamado cuando haya sido adquirida con posterioridad a los hechos que motiven la petición de extradición.

CAPITULO II

Procedimiento

Artículo 16

La petición formal de extradición y los documentos en que se apoye el Estado solicitante, deberán contener:

I.-La expresión del delito por el que se pide la extradición.

II.- La prueba que acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del reclamado. Cuando el individuo haya sido condenado por los Tribunales del Estado solicitante, bastará acompañar copia auténtica de la sentencia ejecutoriada;

III.-Las manifestaciones a que se refiere el artículo 10, en los casos en que no exista tratado de extradición con el Estado solicitante.

IV.-La reproducción del texto de los preceptos de la ley del Estado solicitante que definan el delito y determinen la pena, los que se refieran a la prescripción de la acción y de la pena aplicable y la declaración autorizada de su vigencia en la época en que se cometió el delito;

V.-El texto auténtico de la orden de aprehensión que, en su caso, se haya librado en contra del reclamado; y

VI.-Los datos y antecedentes personales del reclamado, que permitan su identificación, y siempre que sea posible, los conducentes a su localización. Los documentos señalados en este artículo y cualquier otro que se presente y estén redactados en idioma extranjero, deberán ser acompañados con su traducción al español y legalizados conforme a las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.

Artículo 17

Cuando un Estado manifieste la intención de presentar petición formal para la extradición de una determinada persona, y solicite la adopción de medidas precautorias respecto de ella, éstas podrán ser acordadas siempre que la petición del Estado solicitante contenga la expresión del delito por el cual se solicitará la extradición y la manifestación de existir en contra del reclamado una orden de aprehensión emanada de autoridad competente.

Si la Secretaría de Relaciones Exteriores estimare que hay fundamento para ello, transmitirá la petición al Procurador General de la República, quien de inmediato promoverá ante el Juez de Distrito que corresponda, que dicte las medidas apropiadas, las cuales podrán consistir, a petición del Procurador General de la República, en arraigo o las que procedan de acuerdo con los tratados o las leyes de la materia.

Artículo 18

Si dentro del plazo de dos meses que previene el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contados a partir de la fecha en que se hayan cumplimentando las medidas señaladas en el artículo

anterior, no fuere presentada la petición formal de extradición a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se levantarán de inmediato dichas medidas.

El juez que conozca del asunto notificará a la Secretaría de Relaciones Exteriores el inicio del plazo al que se refiere este artículo, para que la Secretaría, a su vez, lo haga del conocimiento del Estado solicitante.

Artículo 19

Recibida la petición formal de extradición, la Secretaría de Relaciones Exteriores la examinará y si la encontrare improcedente no la admitirá, lo cual comunicará al solicitante.

Artículo 20

Cuando no se hubieren reunido los requisitos establecidos en el tratado o, en su caso, en el artículo 16, la Secretaría de Relaciones Exteriores lo hará del conocimiento del Estado promovente para que subsane las omisiones o defectos señalados, que en caso de estar sometido el reclamado a medidas precautorias, deberá cumplimentarse dentro del término a que se refiere el artículo 18.

Artículo 21

Resuelta la admisión de la petición la Secretaría de Relaciones Exteriores enviará la requisitoria al Procurador General de la República acompañando el expediente, a fin de que promueva ante el Juez de Distrito competente, que dicte auto mandándola cumplir y ordenando la detención del reclamado, así como, en su caso, el secuestro de papeles, dinero u otros objetos que se hallen en su poder, relacionados con el delito imputado o que puedan ser elementos de prueba, cuando así lo hubiere pedido el Estado solicitante.

Artículo 22

Conocer el Juez de Distrito de la jurisdicción donde se encuentre el reclamado.

Cuando se desconozca el paradero de este, ser competente el Juez de Distrito en Materia Penal en turno del Distrito Federal.

Artículo 23

El Juez de Distrito es irrecusable y lo actuado por él no admite recurso alguno. Tampoco serán admisibles cuestiones de competencia.

Artículo 24

Una vez detenido el reclamado, sin demora se le hará comparecer ante el respectivo Juez de Distrito y éste le dará a conocer el contenido de la petición de extradición y los documentos que se acompañen a la solicitud.

En la misma audiencia podrá nombrar defensor. En caso de no tenerlo y desea hacerlo, se le presentará lista de defensores de oficio para que elija. Si no designa, el Juez lo hará en su lugar

El detenido podrá solicitar al Juez se difiera la celebración de la diligencia hasta en tanto acepte su defensor cuando éste no se encuentre presente en el momento del discernimiento del cargo.

Artículo 25

Al detenido se le oirá en defensa por sí o por su defensor y dispondrá hasta de tres días para oponer excepciones que únicamente podrán ser las siguientes:

I.-La de no estar ajustada la petición de extradición a las prescripciones del tratado aplicable, o a las normas de la presente ley, a falta de aquél; y

II.-La de ser distinta persona de aquella cuya extradición se pide.

El reclamado dispondrá de veinte días para probar sus excepciones. Este plazo podrá ampliarse por el Juez en caso necesario, dando vista previa al Ministerio Público. Dentro del mismo plazo, el Ministerio Público podrá rendir las pruebas que estime pertinentes.

Artículo 26

El Juez atendiendo a los datos de la petición formal de extradición, a las circunstancias personales y a la gravedad del delito de que se trata, podrá conceder al reclamado, si éste lo pide, la libertad bajo fianza en las mismas condiciones en que tendría derecho a ella si el delito se hubiere cometido en territorio mexicano.

Artículo 27

Concluido el término a que se refiere el artículo 25 o antes si estuvieren desahogadas las actuaciones necesarias, el Juez dentro de los cinco días siguientes, dará a conocer a la Secretaría de Relaciones Exteriores su opinión jurídica respecto de lo actuado y probado ante el.

El Juez considerará de oficio las excepciones permitidas en el artículo 25, aún cuando no se hubieren alegado por el reclamado.

Artículo 28

Si dentro del término fijado en el artículo 25 el reclamado no opone excepciones o consiente expresamente en su extradición, el Juez procederá sin más trámite dentro de tres días, a emitir su opinión.

Artículo 29

El Juez remitirá, con el expediente, su opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que el Titular de la misma dicte la resolución a que se refiere el artículo siguiente. El detenido entre tanto, permanecerá en el lugar donde se encuentra a disposición de esa Dependencia.

Artículo 30

La Secretaría de Relaciones Exteriores en vista del expediente y de la opinión del Juez, dentro de los veinte días siguientes, resolverá si se concede o rehúsa la extradición. En el mismo acuerdo, se resolverá, si fuere el caso, sobre la entrega de los objetos a que se refiere el artículo 21.

Artículo 31

Si la decisión fuere en el sentido de rehusar la extradición se ordenará que el reclamado sea puesto inmediatamente en libertad a menos que sea el caso de proceder conforme al artículo siguiente.

Artículo 32

Si el reclamado fuere mexicano y por ese solo motivo se rehusare la extradición la Secretaría de Relaciones Exteriores notificará el acuerdo respectivo al detenido, y al Procurador General de la República, poniéndolo a su disposición,

y remitiéndole el expediente para que el Ministerio Público consigne el caso al tribunal competente si hubiere lugar a ello.

Artículo 33

En todos los casos si la resolución fuere en el sentido de conceder la extradición ésta se notificará al reclamado.

Esta resolución sólo será impugnable mediante juicio de amparo. Transcurrido el término de quince días sin que el reclamado o su legítimo representante haya interpuesto demanda de amparo o si, en su caso, éste es negado en definitiva, la Secretaría de Relaciones Exteriores comunicará al Estado solicitante el acuerdo favorable a la extradición y ordenará que se le entregue el sujeto.

Artículo 34

La entrega del reclamado, previo aviso a la Secretaría de Gobernación, se efectuará por la Procuraduría General de la República al personal autorizado del Estado que obtuvo la extradición en el puerto fronterizo o en su caso a bordo de la aeronave en que deba viajar el extraditado.

La intervención de las autoridades mexicanas cesará, en éste último caso, en el momento en que la aeronave esté lista para emprender el vuelo.

Artículo 35

Cuando el Estado solicitante deje pasar el término de sesenta días naturales desde el día siguiente en que el reclamado quede a su disposición sin hacerse cargo de él, éste recobrará su libertad y no podrá volver a ser detenido ni entregado al propio Estado, por el mismo delito que motivó la solicitud de extradición.

Artículo 36

El Ejecutivo de la Unión podrá acceder en los términos del artículo 10, cuando lo solicite un Estado extranjero para concederle una extradición que no sea obligatoria en virtud de un tratado.

Artículo 37

Los gastos que ocasione toda extradición podrán ser gastados por el erario federal con cargo al Estado solicitante que la haya promovido.

TRANSITORIOS

Artículo Primero

Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y abroga la ley de Extradición de 19 de mayo de 1897.

Artículo Segundo

Todas las extradiciones que estén en trámite al entrar en vigor esta ley se sujetarán a sus disposiciones.

México, D. F., a 18 de diciembre de 1975. - Emilio M. González Parra, S. P. Luis del Toro Calero, D. P.-Germán Corona del Rosal, S. S.-Rogelio García González, D. S.-Rúbricas

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder

Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintidós días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y cinco. - Luis Echeverría Álvarez.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Emilio O. Rabasa.-Rúbrica.-El Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia.-Rúbrica.